El 23 de agosto pasado, Standard & Poor's cambió de estable a negativa la perspectiva para la deuda soberana de corto y largo plazo de México en moneda local y en moneda extranjera, lo que implica una probabilidad de 33 por ciento de rebajar sus calificaciones crediticias en los próximos 24 meses, si el deterioro en el nivel de la deuda o en la carga de su servicio es mayor al esperado.

Esta advertencia sobre la vulnerabilidad fiscal del Gobierno mexicano confirma lo que he reiterado en varias ocasiones desde el año pasado: se necesita una cirugía mayor en el gasto del sector público federal que, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), pasó de 18.1 por ciento, en 1998, a 27.0 por ciento en 2015.

El gasto creciente fue financiado, sólo en parte, por un incremento en los ingresos presupuestarios del sector público federal, mientras que el resto provino de un alza en el saldo de la deuda pública neta, que pasó de 23.5 por ciento del PIB en 1998 a 43.2 por ciento en 2015.

Este nivel de endeudamiento nubla nuestro horizonte económico, ya que el ambiente externo que favoreció la contratación de deuda después de la Gran Recesión de 2008 y 2009 por la política monetaria extremadamente laxa en los países avanzados, se ha tornado desfavorable ante la expectativa de un proceso de alza

Cirugía Mayor

en las tasas de interés en Estados Unidos (EU), que provoca ahora la depreciación del peso frente al dólar.

Los años de tasas de interés cero en EU hicieron temporalmente atractivos a los países emergentes, y esto se tradujo en México en un estímulo para un gasto fiscal deficitario y una política monetaria complaciente, en la creencia ingenua que esas condiciones financieras serían la nueva realidad para nuestra economía.

La sobriedad fiscal que, con mucho sacrificio, se logró en la última década del siglo pasado y los primeros años de este siglo, se comenzó a perder en la segunda mitad del Gobierno de Felipe Calderón y desapareció en la Administración actual, al gastarse todos los ingresos extraordinarios del petróleo y elevar la deuda pública.

Los ingresos petroleros que, en principio, deberían ser una bendición, han sido en realidad una maldición, porque cada vez que se elevan por alzas en el precio del crudo acaban por dilapidarse y favorecer un incremento del gasto y la deuda que, en casos extremos como los de la década

de 1980, culminaron en una grave crisis fiscal, de balanza de pagos, inflación y depreciación de nuestra moneda frente al dólar.

Esta historia amenaza con repetirse por la terquedad del Gobierno en no recortar notablemente su gasto y sanear sus finanzas. La vulnerabilidad fiscal actual se ha pretendido resolver con parches tributarios disfrazados de reforma hacendaria, como los más recientes que entraron en vigor en 2014, así como con las coberturas petroleras y el uso del remanente de operación del Banco de México.

Estas acciones son paliativos temporales que sólo posponen la aplicación de la solución definitiva, que consiste en una disminución significativa del gasto público y del tamaño del Gobierno en la economía. Entre más se dilaten nuestras autoridades en agarrar al toro por los cuernos, mayores serán los daños para la actividad económica en el País.

Los ajustes en el gasto son urgentes, puesto que el daño a los ingresos públicos no se limita a la caída en el precio del petróleo, sino que también incluye una dismi-

nución significativa en los volúmenes de exportación, que pasaron de 1.87 millones de barriles por día (mbd) en 2004 a un estimado menor a 0.8 mbd para 2017.

Es preocupante, además, que el Congreso en vez de presionar por una mayor disciplina fiscal, le haga comparsa al Gobierno Federal, al volver a usar la semana pasada el "truco" de elevar la estimación del precio del dólar para "aumentar" los ingresos públicos en pesos, pero no incorpora en sus números que esa mayor paridad también eleva el costo de las importaciones de gasolina y otros derivados del petróleo, el gasto financiero y la deuda pública.

Los problemas de nuestra economía cuando comenzó la Gran Recesión tenían un origen completamente externo, y así lo entendían los inversionistas internacionales, que hasta llegaron a hablar del "Momento México". Nuestras autoridades, desde entonces, se han encargado de crear un desequilibrio fiscal lo suficientemente grande como para que ahora y hacia delante nuestras penurias económicas sean de origen interno.

Considero que la ruta elegida por el Gobierno y el Congreso para el gasto, el déficit y la deuda pública en 2017 llevará a una reducción de la calificación crediticia y a mayores presiones sobre el peso y la inflación interna.